

El bosque en llamas

Ramón Armengod *

NUESTROS veranos se están convirtiendo en un brasero a contrapié: cuanto más seco y caluroso resulta el tiempo atmosférico, más leña al fuego. Esta paradoja, que hasta el momento ha costado veintiocho vidas, indica hasta dónde el absurdo individualista ha suplantado al sentido común.

Aunque las causas de los incendios sean variadas, ambiguas y discutidas, la primera consecuencia queda clara: el pueblo soberano, que somos todos, ni pone de su parte lo que tiene que poner, ni exige a sus gobernantes democráticamente elegidos lo que tiene que exigirles, para poner punto final a este «Auto de Fe» de inocentes. Es cierto que la destrucción ecológica del bosque por el fuego está tomando proporciones alarmantes en todo el planeta, pero cada pueblo tiene que responder de su propio territorio.

* Embajador. Ex director de la Escuela Diplomática

«Algo suyo se quema»

EN nuestro caso, el árbol, y su colectivo, el bosque, ha sido siempre objeto de polémica; media España aparecía como arboricida, y media identificaba árbol con civilización. No hubo programa regeracionista que no hablase de reforestación. El general Franco utilizó esta tradición, como muchas otras de más calibre, para justificar su régimen. De ahí la identificación de pantanos y repoblación forestal como cosa suya. Independientemente de razones técnicas sobre la superioridad de las especies autóctonas frente a otras, el hecho es que el devorador eucaliptus y el socorrido pino aparecían como uno de los triunfos del franquismo sobre las peladas serranías de la Guerra Civil.

Los primeros incendios dieron lugar a uno de los combates ideológicos de la transición, antes incluso de la muerte del general. Frente a una campaña que insistía en que todos perdíamos algo en cada incendio, la musa progresista oponía el sardónico comentario: «Cuando arde el bosque, algo suyo se quema, señor marqués», homenaje a las malas relaciones históricas entre arrendatarios, medieros, enfiteutas y otros proletarios de la tierra, con sus propietarios más o menos ennoblecidos.

Por ello, una de las primeras interpretaciones de los incendios fue la revancha del campesino frente a quienes habían convertido en bosque las tierras comunales y otras, ya que butano y electricidad eximían de la necesidad de talar el bosque para calentarse.

La siguiente sospecha correspondió a otra dinámica: la del lucro económico, motor del capitalismo, subdividida en dos posibilidades: o por los beneficios obtenidos por la venta de madera quemada, o por los de la recalificación de terrenos con vistas a su urbanización para «segunda vivienda».

En los últimos años, la hipótesis generalizada es la de la negligencia culpable de quienes, durante sus excursiones, hacen fuego, sin necesidad ni cuidado, añadiendo en casos aislados la intervención de pirómanos eficaces, de catastrofistas juveniles, que juegan a la violencia, y de venganzas privadas o menos.

Lo absolutamente cierto es el descontrol gubernamental y social que se desata cada verano, como si nada se hubiese aprendido de los incendios de los últimos quince años.

Una triple pregunta

AL llegar aquí, normalmente, el lector tendrá que exigir soluciones: «Algo urgente hay que hacer para acabar con esta plaga». Sin ánimo de darlas, no siendo técnico en la materia, creo que deberían hacerse unas preguntas:

A) Si todos lamentan la quema de bosques, ¿por qué no se pone remedio? B) ¿A quiénes corresponde ponerlo? C) ¿Qué medidas hay que tomar?

Para contestar a la primera, hay que entrar en el terreno de las opiniones, de los intereses, de los egoísmos. Aunque se siente un mal precedente, se puede afirmar que los incendios estivales han acabado por considerarse «catástrofes naturales», entendiendo por natural lo desagradable que se acepta econgiéndose de hombros, porque unos no saben y otros no quieren arrimarlos. Para nuestro subconsciente urbano, el campo es algo que está ahí para quitar preocupaciones, no para darlas. Además, para la mayoría de los españolitos de hoy, el campo es el lugar de donde vienen ellos o sus padres, asociado con atraso y pobreza en la visión progresista de nuestra cultura dominante.

Este mal recuerdo se une con otra creencia, ésta muy actual: lo que quede del campo está a merced de las tribus urbanas, para su uso y abuso. Tales tribus podrían ser:

1) Los instalados en el sistema. Buscan reproducir su modelo de vida urbano en el campo, sin agobios, estrecheces ni contaminación. Son los demandantes de «segunda vivienda», los responsables de los «planes de ordenación del suelo».

2) Los rebeldes pacíficos frente al sistema. No se trata de los militantes ecologistas, sino los que se dedican a ligar deportiva, romántica o estéticamente con la naturaleza, a la búsqueda de reservas o parques naturales, o de la ruta del Románico.

Siendo inocentes, dan ocasión a la explotación de la naturaleza por el sector turístico o autonómico, por los semanarios de la prensa diaria, a la búsqueda de nuevas imágenes: nada más peligroso para las reservas ecológicas que darlas a conocer. Porque con ello, ponen sobre la pista.

3) Los periféricos del sistema. Son aquellos que tenían vocación de acceder a la primera tribu, y no lo han conseguido por diversas carencias, desde las más nobles a las más vulgares.

Han llegado a tener coche, pero no segunda vivienda, y partiendo del

principio de que «lo que hay en España es de los españoles», trasladan al bosque, junto con sus familias, ignorancias, egoísmos y tensiones ciudadanas. Por su número, más que por sus intenciones, son peligrosas para las zonas forestadas (a ellos se refería como «paellers» nuestro actual ministro de Agricultura).

4) Los marginados y contestatarios. Todos los conocemos, siempre existieron, pero la televisión nos los refriega ahora en seriales y películas norteamericanas. Eternos adolescentes, rebeldes sin causa, otros con demasiadas, psicópatas, vengadores, supermanes, etc. Llevan su violencia al bosque, y siendo grupos reducidos, son los más peligrosos; lo peor es cuando hay que incluir, aunque sea temporalmente entre ellos a los hijos de los grupos primero y tercero, que transitan por una adolescencia cada vez más incontrolada.

Esas tribus urbanas se adentran imperturbablemente en el decaído paisaje campesino, hacia nuestras reservas forestales menos protegidas que los antiguos y nuevos cotos de caza.

Quizá esta enumeración ayude a comprender la falta de reacción de la sociedad y de la clase política.

«Una solución quiero»

¿A quiénes corresponde poner remedio? Legalmente a las autoridades autonómicas la prevención y extinción de incendios; y al Estado, la búsqueda y captura de los culpables.

Los gobiernos autonómicos se ven condicionados por los intereses municipales y comarcales, intereses frecuentemente conflictivos entre sí, a los que hay que añadir la disputa a todos los niveles entre los partidos y la presión sindical, que se opone a la contratación a empresas privadas de los servicios de prevención, y a la utilización de mano de obra subsidiada por paro u otras razones.

A nivel estatal, sorprende la falta de diligencia del Ejecutivo y el Legislativo. Se diría que en el subconsciente de la clase política en este tema actúa la prioridad del voto urbano frente al rural, relativamente controlable por medios financieros. Hasta ahora la respuesta puntual ante el clamor de los siniestrados se traduce en ayudas económicas y planes de repoblación, más puntuales que coherentes. Además, el silencio sobre la ejecución de los mismos y sus resultados es contraproducente.

Difícil calificación merece el silencio de los grupos y partidos ecologistas, como si los bosques nacionales no estuviesen incluidos en sus preocupaciones planetarias (los grupos catalanes son la excepción, aunque hayan aprovechado el marco de la «Diada»).

¿Qué medidas tomar? Para la represión del fenómeno, medidas penales y civiles subsidiarias coyunturalmente duras, especialmente en el caso de la responsabilidad civil.

A la prevención debería dársele carácter planificado y estable, con clara definición de los organismos responsables e integración de todos los niveles administrativos, utilizando la burocracia existente, pero con creación de empleo para las tareas específicas de prevención.

Papel del Estado y la sociedad

PARA la extinción ha de conjugarse la intervención estatal, planificada, rápida y extraordinaria, pues los incendios forestales atentan contra la seguridad del país, por lo que el Ejército ha de ayudar en esta acción hasta que la estructura civil de prevención y extinción sean suficientes.

No debería descartarse la recuperación por el Estado de las facultades delegadas en esta materia a las comunidades autónomas, con carácter excepcional, si se siguieran dando los lamentables ejemplos de incapacidad y descontrol en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

En otro plano debería abrirse inmediatamente un debate a nivel nacional, para concienciar a la sociedad sobre el estado de la cuestión, con vistas a la acción legislativa y ejecutiva. Una primera medida a tomar sería la campaña anual de prevención, cada primavera, con la intensidad que se ha hecho en el caso de la seguridad vial.

Hay que terminar insistiendo en que pocos temas como éste sirven de banco de prueba a una sociedad democrática, para conocer su grado de madurez y solidaridad, su capacidad de autocontrol, y de gestión de sus recursos, su preocupación por su propio futuro. Cuando se quema el bosque, independientemente de sus propietarios o de sus incendiarios, se disminuye el bienestar presente, y se pone en peligro el futuro.

Ojalá esta última reflexión acabase siendo una firme creencia social defendida por un consenso mayoritario.